



El Consejo Superior Universitario de la UCA condena la represión contra los educadores salvadoreños

1.- La represión contra el pueblo salvadoreño por parte de los Cuerpos de Seguridad y de los grupos para-militares, que actúan en el país con total impunidad, sigue su curso premeditado e implacable. En lo que llevamos de año, esto es, desde que asumió el poder la coalición de los militares con el Partido Demócrata Cristiano no han sido menos de cuatro mil las víctimas que entre el pueblo ha dejado la represión, aun dejando de contar las víctimas resultantes de "enfrentamientos" armados y de "ajusticiamientos". En varias ocasiones hemos analizado, denunciado y condenado esta represión, que no tiene semejante en la historia de El Salvador. Pero hoy queremos centrar nuestra mirada sobre la represión desatada contra ese grupo tan especial e importante de los educadores salvadoreños.

2.- Entre los educadores más egregios del pueblo salvadoreño, queremos nombrar en primer lugar al llorado Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que domingo tras domingo iluminaba la conciencia del pueblo y buscaba dirigirla en pos de la justicia y de la libertad, de la verdad y de la paz. Este excepcional don de Dios al pueblo de El Salvador cayó abatido ante el altar después de haber pronunciado una de sus homilias. Era un 24 de marzo, cuando una bala asesina apagó su corazón y acalló su voz, hoy difundida por todo el mundo hasta convertirlo en el salvadoreño más universal. No lo toleraron las fuerzas represivas y su asesinato, como el de las demás víctimas de la represión, ha quedado, a pesar de las promesas y de los indicios delatores, en la más completa impunidad.

Cosa parecida ocurrió en el asesinato del sacerdote franciscano, Padre Spezzoto, educador religioso en uno de nuestros pueblos, al que sirvió como párroco por más de veinticinco años y al que llevó junto con la palabra de Dios sus conocimientos técnicos en el cultivo de la vid.

Con ellos otros muchos catequistas y predicadores de la palabra asesinados o desaparecidos. Tantos sacerdotes, religiosos y religiosas hostigados, amenazados, expulsados del país y obligados a esconderse.

Todo ello no es sino una muestra de la persecución religiosa que se sigue dando en el país y de la represión contra quienes han hecho de la palabra educadora y moralizadora su vocación y su modo de servir.

3.- Durante estos seis meses ha proseguido también la masacre de los maestros. Son sesenta y cuatro en lo que llevamos de año, algunos de ellos masacrados ante sus propios alumnos. Mención especial merece el Profesor Reynaldo Barillas Guzmán, que fue asesinado quince días después de haber sido premiado con la medalla "Darío González" por el Ministerio de Educación, mediante votación entre todos los maestros del país. Pero no son sólo los asesinados. Algunos de sus dirigentes siguen capturados y cientos de ellos andan huyendo por las continuas amenazas del Escuadrón de la Muerte, de la Unión Guerrera Blanca, del Ejército Anticomunista Salvadoreño y de otros grupos, que operan en el país con total impunidad, sin que se haya descubierto todavía a uno solo de estos asesinos.

4.- Igualmente en estos seis meses los Cuerpos de Seguridad y Cuerpos combinados, amparados en el Estado de Sitio, han entrado violentamente en Escuelas, Institutos Nacionales, Colegios Privados, capturando y matando estudiantes, cateando los locales, destrozando las instalaciones. Las propias autoridades han declarado públicamente que la más ligera sospecha será razón suficiente para la intervención militar. Porque se trata de verdaderas intervenciones militares —no menos de cien en lo que llevamos de año— con decenas de soldados fuertemente armados, con tanquetas y con gran despliegue militar, como si se tratara de acciones de guerra. De más está decir que el resultado de esas pesquisas ha sido ridículo y ha tenido que ser deformado por la propaganda oficial.

5.- El jueves 26 de junio, tras los dos días del paro nacional, so pretexto de catear zonas aledañas a la Universidad de El Salvador, se desató un fortísimo operativo contra ella. El ataque apoyado por tanquetas y perpetrado por Cuerpos combinados, ocasionó más de 40 muertos. No fueron repelidos con armas como lo esperaban. Más aún, prolijos y continuados registros han demostrado, a pesar de campañas publicitarias tendenciosas, que en la Universidad no había armas que pudieran considerarse un peligro real y, menos aún, un arsenal que pudiera servir de base a grupos armados. En el momento de la ocupación unos cinco mil estudiantes estaban dentro de ella cumpliendo sus deberes académicos, así como centenares de profesores y administrativos. Muchos de ellos fueron ultrajados, golpeados, obligados a desnudarse, como prueba palpable de la hostilidad y del odio que existe contra la Universidad y los educadores en general entre algunos sectores de la Fuerza Armada, y prueba también de la ceguera política de quienes ordenan este tipo de acciones. Desde ese día la Universidad ha quedado de nuevo, como en los tiempos del Coronel Molina y del Coronel Lemus en manos del Ejército, quedando así interrumpida la actividad universitaria, interrupción que afecta a cerca de treinta mil estudiantes.





6.- También nuestra Universidad ha sentido los efectos de la represión en estos seis meses de 1980, como nunca antes lo había sentido. En anterior Pronunciamiento de nuestro Consejo Superior Universitario, que no pudo ser publicado por la censura imperante en el país, denunciarnos cómo el día 22 de marzo la Policía Nacional invadió el predio universitario, asesinando al estudiante Mauricio Orantes y apresando sin causa alguna a otra estudiante. El sábado 21 de junio, un fingido miembro de las FPL hacía desde la Guardia Nacional un amañado ataque contra nuestra Universidad, como si ella dirigiera ideológicamente a las organizaciones político-militares y prestara su imprenta para la propaganda política de la misma; estas falsas acusaciones, respaldadas por el servicio de prensa de la Guardia Nacional y difundidas repetidamente por los medios de comunicación social, supone una grave agresión. Es probable que como consecuencia de esta campaña, desatada desde la Guardia, en la madrugada del 29 de junio tres escuadras del denominado Ejército Anticomunista Salvadoreño dinamitaran e incendiaran la imprenta de la Universidad así como el local de la Sociedad de Estudiantes de Economía. Son también varios los estudiantes y profesores que han sido asesinados, capturados, desaparecidos y obligados a salir del país. Se desatan campañas sistemáticas de rumores y amenazas que constituyen en conjunto una guerra psicológica que hace muy difícil la normalidad de la actividad académica.

7.- Todo este cuadro de represión contra los educadores salvadoreños nos lleva a reflexionar sobre la caótica situación que la hace posible. ¿Por qué esta saña contra los educadores? ¿Por qué tanta muerte y persecución?

El argumento con que se pretende justificar esta constante y sistemática represión es que los educadores son los fomentadores de la subversión y de la insurrección. Se han metido en política, predicando el odio y la lucha de clases; ya no son educadores sino agentes del comunismo internacional, que han convertido las aulas en lugar de indoctrinamiento cuando no de agitación política o de entrenamiento militar.

Esta apreciación no es sólo superficial sino deformada y calumniosa. Es cierto que la situación de El Salvador, la gravedad del actual conflicto político y otra serie de circunstancias históricas han llevado a la ampliación de la labor educativa hasta llegar en ocasiones a formas de acción política, que sobrepasan la especificidad de la educación formal y de los modos propios de esa educación. Pero esta ampliación está justificada por la imposibilidad de usar canales democráticos de organización, de reunión y de expresión. Por ello estas acciones ocasionales de ningún modo legitiman ni el asesinato de los educadores ni la violación de los recintos académicos ni el quebrantamiento de la autonomía universitaria.

Cabe preguntarse entonces por qué realmente los educadores, hombres como Monseñor Romero o como tantos maestros caídos, se han visto obligados en conciencia a convertirse en voz del pueblo y a ponerse de su lado en la lucha que este pueblo mantiene por darse a sí mismo el destino histórico que ha elegido. Los educadores son en su conjunto los hombres más instruidos del país, son hombres idealistas y sacrificados de modo que sus retribuciones económicas van por lo general muy por debajo de sus capacidades y del servicio que prestan al país. Por eso los que no están de acuerdo con la manera de actuar de tantos maestros beneméritos deben preguntarse por qué precisamente esos hombres adoptan esas posiciones, que tildan equivocada o maliciosamente de subversivas, cuando lo que hacen es reclamar una patria más justa y más libre, de la que desaparezcán la explotación y la represión.

La respuesta no es difícil. A los educadores y a las instituciones educativas se las ataca y persigue porque se han convertido en agentes y centros de la verdad sobre la situación del país y sobre el camino que ha de seguirse para superarla. Incluso las exageraciones que se hayan podido cometer ocasionalmente no son sino reflejos tal vez exagerados de una gran verdad: que la situación del país es intolerable y que cualquiera que sea depositario de una pequeña llama de idealismo quiere contribuir a cambiarla radicalmente. Creer entonces que matando maestros, educadores, estudiantes van a conseguir que se prolongue el sistema de injusticia y de explotación que impera en El Salvador es un error y un crimen. Un error porque logra lo contrario que pretende, ya que cada vez son más los que se alistan en la causa del pueblo que lucha por su liberación; un crimen, porque asesina a los mejores servidores del pueblo y porque ahoga en sangre la palabra de la verdad.





8.- Son evidentes los daños que se están causando al país con esta sistemática y planeada persecución contra los maestros y estudiantes, contra los centros educativos. No sólo demuestra la descomposición social en la que ha caído el actual proyecto nacional propiciado por la Junta de Gobierno, el Partido Demócrata Cristiano y los Estados Unidos sino que dificulta enormemente la marcha del sector educativo tan importante para el futuro de El Salvador.

El Salvador tuvo a la Universidad Nacional paralizada y traumatizada prácticamente desde 1972, fecha de la anterior intervención militar, hasta mediados de 1979. Esto ha hecho que la formación académica de miles de universitarios haya sido muy deficiente durante casi una década; esto ha hecho que se hayan despilfarrado cuantiosos recursos nacionales. Una Universidad intervenida, a la que se le niega su autonomía, es una Universidad inservible. La actual tiene sin duda problemas, pero desempeña una función necesaria. Si se dan en ella acciones paramilitares de algún tipo —cosa en principio rechazable, dadas las características de una Universidad— no por eso está legitimada en momento alguno una intervención militar, máxime cuando las propias autoridades universitarias se esfuerzan en evitarlo. Tampoco la propaganda oral y escrita contra la represión, contra el Gobierno y en favor de un radical cambio social, justifica ni legitima la intervención y el constante amedrantamiento de la comunidad universitaria.

Igualmente rechazamos los distintos modos de agresión contra nuestra Universidad. Las sistemáticas campañas tendenciosas contra nuestra actividad académica, contra nuestras publicaciones y, sobre todo, contra miembros de nuestra comunidad no tienen justificación alguna. No puede decirse que nuestra imprenta sea un foco de subversión, cuando está a la vista de todos su producción literaria y científica; no puede decirse que en Nuestra Universidad haya desorden y anarquía, cuando se llevan todas las actividades académicas con rigor y disciplina; no puede decirse que los distintos grupos estudiantiles hayan sobrepasado lo que compete a un gremio estudiantil en las actuales circunstancias del país. Sólo si se respeta nuestra autonomía, si se deja de hostigarnos por medios injustos, podremos desempeñar la difícil tarea en que nos hemos comprometido.

Pero la protesta contra los ataques a la Universidad de El Salvador y contra nuestra Universidad no nos hacen olvidar que se dan dentro de un contexto más amplio de agresión a los educadores de El Salvador, a todo el sistema educativo y, más ampliamente, al conjunto organizado de las fuerzas populares. No es este el camino para encontrar la paz ni para hacer posibles los profundos cambios estructurales que necesita el país. Una vez más tenemos que pedir alto a la represión, respeto al pueblo, respeto a la vida humana. Si no es por amor al pueblo, si no es por convicción personal, al menos por respeto a la opinión internacional, pedimos que no se sigan violando de esta manera los derechos humanos. Nunca fueron violados tan salvajemente en este país como lo están siendo en estos seis meses.

9.- Por todo ello, lamentamos, denunciemos y condenamos la represión inmisericorde contra el pueblo y especialmente contra los educadores salvadoreños. Pedimos la solidaridad de los educadores latinoamericanos en esta denuncia y condena.

Condenamos en particular los continuados ataques a los centros educativos y exigimos al Gobierno que cese esta práctica de los cateos, de los ametrallamientos, de las intervenciones.

Condenamos la intervención militar de la Universidad de El Salvador y exigimos que sea devuelta inmediatamente a sus autoridades legítimamente constituidas.

Exigimos que se respete la autonomía de las Universidades, pues solo con esa autonomía y con el respeto a la inviolabilidad de los recintos universitarios se podrá tener aquel mínimo de tranquilidad y sosiego, sin los que es imposible una seria acción educativa. Este respeto debe extenderse al estudiante universitario, muchas veces hostigado por el mero hecho de serlo.

San Salvador, 4 de julio de 1980